

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE:	TEEG-PES-06/2019
DENUNCIANTE:	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS:	LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA, OTRORA CANDIDATA PARA CONTENDER A UNA DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO XI, POSTULADA POR LA COALICIÓN “POR GUANAJUATO AL FRENTE; COALICIÓN “POR GUANAJUATO AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
AUTORIDAD SUSTANCIADORA:	CONSEJO DISTRITAL XI Y UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA Y DE LO CONCENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
MAGISTRADA PONENTE:	MARÍA DOLORES LÓPEZ LOZA
PROYECTISTAS:	ALEJANDRO CAMARGO CRUZ Y JUAN ANTONIO MACÍAS PÉREZ.

Guanajuato, Guanajuato; a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

Sentencia definitiva que decreta la **caducidad** de la facultad sancionadora para fincar responsabilidades a las partes denunciadas, en razón a que la autoridad administrativa electoral demoró un año entre la presentación de la denuncia y la comunicación definitiva de las presuntas irregularidades a este Tribunal, lo que imposibilita el dictado de una sentencia de fondo que dirima la controversia planteada.

GLOSARIO

Coalición	Coalición “ Por Guanajuato al Frente ” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática
Consejo Distrital:	Consejo Distrital XI del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados

	Unidos Mexicanos
Ley electoral local:	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
PAN:	Partido Acción Nacional
PRD:	Partido de la Revolución Democrática
PRI:	Partido Revolucionario Institucional
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Suprema Corte:	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Unidad Técnica Jurídica:	Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

1.- ANTECEDENTES. De las constancias que obran en autos y hechos notorios que puede invocar este Tribunal¹ se advierte que dentro del proceso electoral 2017-2018, ocurrió lo siguiente:

1.1. Denuncia. El quince de junio de dos mil dieciocho, el *PRI* a través de Cristal Paola Sánchez Bravo, representante suplente ante el *Consejo Distrital*, presentó denuncia en contra del Lorena del Carmen Alfaro García, quien fuera candidata a Diputada Local por el Distrito XI, de la *Coalición* y de los partidos políticos que la integraron, por la presunta difusión en la red social denominada Facebook, en la que a decir de la denunciante se exhibieron a menores de edad sin contar con las autorizaciones respectivas.

1.2. Radicación, registro y diligencias de investigación preliminar. El diecinueve de junio del año próximo pasado, el *Consejo Distrital*, radicó y registró la denuncia descrita en el punto anterior, bajo el número **4/2018-PES-CDX**; además, consideró necesario realizar diversas diligencias de investigación preliminar, previo a ordenar el emplazamiento a la parte denunciada.

1.3 Admisión y emplazamiento. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias de investigación preliminar el *Consejo Distrital*, admitió la denuncia y ordenó emplazar a las partes denunciante y denunciadas de manera personal, citándolas al desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.

¹ En términos de lo dispuesto por el artículo 417 de la *Ley electoral local*.

1.4. Asunción de competencia. Ante la desinstalación del *Consejo Distrital*, en fecha trece de diciembre del año pasado, la *Unidad Técnica Jurídica* asumió la competencia para continuar y sustanciar el Procedimiento Especial Sancionador 4/2018-PES-CDXI, radicándolo bajo el número de expediente **68/2018-PES-CG**; además, en dicho proveído citó de nueva cuenta a las partes a la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.

1.5. Audiencia de ley. En fecha diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, con el resultado que obra en autos.

1.6. Remisión del expediente e informe circunstanciado. El veinte de diciembre del año próximo pasado, la *Unidad Técnica Jurídica* remitió a este Tribunal el expediente **68/2018-PES-CG**, además del correspondiente informe circunstanciado por parte de la *Unidad Técnica Jurídica*.

1.7. Turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, se turnó el expediente a la Tercera Ponencia de este Tribunal.

1.8. Radicación. En fecha treinta de enero del año en curso, la Tercera Ponencia de este Tribunal radicó el expediente bajo el número **TEEG-PES-02/2019**; además, se giraron instrucciones para verificar el cumplimiento por parte de la *Unidad Técnica Jurídica* de los requisitos previstos en la ley, a efecto de constatar la ausencia de omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violaciones a las reglas establecidas en la normativa atinente.

1.9. Acuerdo de reposición de las constancias que integran el Procedimiento Especial Sancionador. En fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, ante la indebida integración del expediente se decretó la nulidad de lo actuado, a partir de que la autoridad administrativa electoral ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer a manera de investigación preliminar, y se ordenó la reposición del procedimiento para que la *Unidad Técnica Jurídica* en sustitución del ya desinstalado *Consejo Distrital*, procediera a lo siguiente:

- **Atender de forma completa y debida todos y cada uno de los planteamientos de la queja** hechos por el partido denunciante, lo que debe ser base de sus actuaciones y determinaciones.

- **Desplegar sus facultades de investigación**, con estricto apego a la normativa electoral aplicable, para constatar la existencia de todos y cada uno de los hechos que se tildan como infracciones a la misma, así como para evitar que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con estos.
- **Emplazar debidamente** a todas las partes que habrán de intervenir en la audiencia de pruebas y alegatos que contempla la sustanciación del procedimiento que nos ocupa, con las formalidades que al efecto establecen los artículos 357 y 373 de la *Ley electoral local* y 58 del *Reglamento de Quejas Denuncias*, a fin de dar certeza de su llamamiento y garantizar las formalidades esenciales del procedimiento.
- **Llevar a cabo nueva audiencia de pruebas y alegatos**, en la que se analicen las pruebas que se ofrezcan por las partes y las que se lleguen a recabar por la autoridad, las que además deberán desahogarse conforme al tipo de prueba y su normatividad que las rige.
- En general, **desarrollar el procedimiento en cada una de sus etapas, hasta su remisión a este Tribunal.**

1.10. Acatamiento del Acuerdo Plenario. En fecha ocho de marzo del año que transcurre, la *Unidad Técnica Jurídica* asumió la determinación emitida por este Tribunal, dejando insubsistentes aquellas constancias que fueron declaradas nulas y procedió a la tramitación del procedimiento por sus etapas respectivas; ordenando la realización de diversas investigaciones preliminares para corroborar la existencia de los hechos denunciados, previo a la admisión o desechamiento de la denuncia y pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la denunciante.

1.11. Nueva admisión de la denuncia, emplazamiento a las partes y pronunciamiento sobre la medida cautelar. En auto emitido el día treinta de mayo de dos mil diecinueve, una vez realizadas las diligencias de investigación preliminar la *Unidad Técnica Jurídica* admitió la denuncia y ordenó emplazar a las partes denunciante y denunciadas de manera personal, citándolas al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Asimismo, en dicho proveído la autoridad administrativa electoral negó la adopción de la medida cautelar solicitada por la denunciante, al resultar improcedente contra actos consumados, irreparables o de imposible reparación.

1.12. Celebración de la nueva audiencia de ley. A las diez horas del día diez de junio del año en curso, se llevó nuevamente el desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, con el resultado que obra en autos.

1.13. Nueva remisión del expediente e informe circunstanciado. El catorce de junio de dos mil diecinueve, la *Unidad Técnica Jurídica* remitió nuevamente a este Tribunal el expediente **68/2018-PES-CG**, además del correspondiente informe circunstanciado.

1.14. Turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso, se turnó el expediente a la Magistrada **María Dolores López Loza**, titular de la Primera Ponencia.

1.15. Radicación. El ocho de julio del año en curso, se radicó el expediente y quedó registrado bajo el número **TEEG-PES-06/2019**.

1.16. Verificación del cumplimiento de requisitos de Ley.² Mediante auto de fecha doce de julio del año que transcurre, se ordenó proceder a verificar el cumplimiento por parte de la *Unidad Técnica Jurídica*, de los requisitos previstos en la Ley, a efecto de constatar que no existieran omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación; o bien, violaciones a las reglas establecidas en la normativa atinente, para en su caso, emitir la declaratoria correspondiente a la debida integración del expediente.

1.17. Debida integración del expediente. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve a las diecisiete horas, se emitió el acuerdo de debida integración del expediente y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

2. CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN.

2.1. Competencia. Este Tribunal es competente para conocer y resolver del presente procedimiento especial sancionador, al tratarse de un procedimiento sustanciado por un órgano electoral que ejerce sus funciones en la circunscripción territorial en la que este órgano plenario ejerce su jurisdicción,

² En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 379 de la *Ley electoral local*.

aunado a que se denuncia la supuesta comisión de actos con incidencia en el proceso electoral local 2017-2018.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 163 fracciones I y VIII, 166 fracción III, 345 al 355, 370 fracción III, 371 al 380 de la *Ley electoral local*, así como 6, 10, fracción I, 11, 13, 14, 97 a 101 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.³

2.2. Normatividad aplicable. Previo a resolver el presente asunto es menester dejar plasmado el marco normativo que resulta aplicable al caso concreto.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 14.-

[...]

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las **formalidades esenciales del procedimiento** y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

[...]

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, **que funde y motive la causa legal del procedimiento.**

[...]

Artículo 17.-

[...]

Toda persona tiene derecho a que se le **administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.** Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]

Artículo 41.-

[...]

Fracción V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral **y de los organismos públicos locales**, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, **la certeza**, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

[...]

³ Lo anterior, con apoyo además en la Jurisprudencia 25/2015 de la *Sala Superior*, de rubro: **“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.”**, así como en la tesis XIII/2018 aprobada por la *Sala Superior*, de rubro: **“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL”**.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

Artículo 356. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador

- I. El Consejo General;
- II. La Comisión de Denuncias y Quejas, y
- III. La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal.

Los consejos distritales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores, salvo lo establecido en el artículo de esta Ley.

[...]

Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

- I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal;
- II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
- III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 372.

[...]

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

- I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
- IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
- V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener la posibilidad de recabarlas, y
- VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

El órgano del Instituto Estatal que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

Artículo 372 Bis. La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal podrá realizar una investigación preliminar previa a la admisión o desechamiento de la denuncia.

Artículo 373. La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, sin prevención alguna, cuando:

- I. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior;
- II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;
- III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o
- IV. La denuncia sea evidentemente frívola.

La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará al Tribunal Estatal Electoral, para su conocimiento.

Cuando la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores al emplazamiento. En el escrito respectivo se le informará al denunciado la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos y con las constancias que la autoridad recabó en la investigación preliminar.

Si la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 357 de esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral. La autoridad substanciadora tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas para iniciar una investigación preliminar y determinar el dictado de medidas cautelares.

Artículo 374. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal, debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, ésta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados. La audiencia se desarrollará en los siguientes términos:
[...]

Artículo 375. Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Estatal Electoral, así como un informe circunstanciado.
[...]
Recibido el expediente, el Tribunal Estatal Electoral actuará conforme lo dispone la legislación aplicable.

2.3. Estudio de la caducidad. Con la finalidad de determinar si este órgano colegiado en materia electoral se encuentra en oportunidad de emitir la resolución correspondiente dentro de este Procedimiento Especial Sancionador, es necesario hacer un pronunciamiento en relación con la actualización o no de la figura jurídica de la caducidad, al ser ésta una cuestión procesal de estudio preferente y oficioso, que encuentra cabida en uno de los principios en que se sustenta el *ius puniendi*, el cual se manifiesta conforme a su naturaleza en el régimen del derecho administrativo sancionador.⁴

En principio, es preciso indicar que la caducidad es una figura de carácter procesal, que se actualiza por la **inactividad o la demora injustificada** dentro de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la

⁴ Resultan aplicables al caso las tesis de la Sala Superior número **XXIV/2013**, cuyo rubro es: **“CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO”** y número **XVL/2002** de rubro: **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS EN EL DERECHO PENAL.”**

cual solo puede operar una vez iniciado el procedimiento respectivo y tiene como finalidad la extinción de la facultad sancionadora de la autoridad competente respecto de dicho procedimiento.

Asimismo, la *Sala Superior* con relación a la figura de la caducidad dentro de los procedimientos especiales sancionadores, en sesión pública celebrada el dieciocho de julio de dos mil trece, aprobó la Jurisprudencia **8/2013**, de rubro y texto siguientes:

“CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.—*De la interpretación sistemática de los artículos 1°, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos previstos en la ley o, en su defecto, en un plazo razonable; que en el procedimiento ordinario sancionador se prevé la prescripción de la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades, en el término de cinco años; que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario, por la brevedad del trámite y resolución que lo distingue y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas y que en la legislación electoral federal no se contempla un plazo de caducidad para la extinción de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa respecto de dicho procedimiento. En ese contexto, en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza y las características del procedimiento.”* (Énfasis añadido).

En relación con el mismo tema, la *Sala Superior* al resolver el expediente **SUP-RAP-525/2011** y acumulado, respecto a la caducidad de la facultad sancionadora en el procedimiento especial sancionador, sostuvo lo siguiente:

- ✓ Atendiendo a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las reglas del debido proceso, **toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos previstos en la ley o, en su defecto, en un plazo razonable**, con la finalidad de respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia, derecho que prevé la resolución de los asuntos en los términos legalmente señalados, o bien, **en plazos breves**, conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin pretendido con su prevención.
- ✓ Los procedimientos administrativos sancionadores, no son ajenos a las reglas del debido proceso, de modo que **se deben evitar dilaciones indebidas, como lo son, la prolongación injustificada**

de la actividad procedimental, o bien, por periodos largos de inactividad procesal por parte de la autoridad.

- ✓ **Cuando se dejan de llevar a cabo los actos procesales encaminados a la solución pronta de la denuncia planteada, se agota la potestad sancionadora y se pierde la posibilidad legal de castigar las infracciones.** Ello, porque el ejercicio de la facultad de sancionar **no puede ser indefinida ni perenne**, sino que debe estar acotada temporalmente, y esa restricción obedece a la observancia del debido proceso.
- ✓ El procedimiento especial sancionador es de **carácter sumario** por la brevedad del trámite y resolución que lo distingue, y la necesidad de definir con la mayor celeridad posible, la licitud o ilicitud de las conductas denunciadas.
- ✓ En la legislación electoral federal -o local- **no se contempla un plazo de caducidad para la extinción de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa respecto de dicho procedimiento**, de ahí que la *Sala Superior* interpretara las disposiciones atinentes a fin de privilegiar el principio de legalidad, en concreto, las reglas del debido proceso.
- ✓ Así, la *Sala Superior*, determinó que, en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, **es proporcional, razonable y equitativo el plazo de un año para que, por regla general, opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso**, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración las características del procedimiento.
- ✓ En atención a la temporalidad apuntada, si la autoridad electoral competente, no ha dictado resolución definitiva, o la dicta una vez transcurrido ese plazo dentro del procedimiento especial sancionador debe entenderse que ha caducado su facultad para sancionar, tomando en consideración que ese tiempo es idóneo para materializar todos los actos válidos tendentes a resolver el procedimiento.
- ✓ Si en ese lapso idóneo, la autoridad electoral ha faltado a su obligación de integrar debidamente el expediente sin causas que

justifiquen ese proceder, y derivado de ello, se ha dejado de emitir la resolución correspondiente, debe considerar que **ha excedido el plazo razonable para dar por finalizado el procedimiento especial** y, en consecuencia, **habrá caducado su facultad de sancionar**.

- ✓ La circunstancia apuntada cobra mayor relevancia, si existe una inacción prolongada durante un término significativo, que además sea injustificada. Esto, **siempre y cuando la paralización no sea consecuencia directa de una actitud asumida por el propio infractor**, contraventora del principio de buena fe que rige toda relación jurídica sustantiva o procesal, o bien, producto del retraso generado por cualquier otra persona jurídica, física o moral, pública o privada, que omita cumplir debidamente los requerimientos formulados por la autoridad competente.

Los mismos razonamientos fueron acogidos por la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente identificado con el número **ST-JRC-2/2017**, a través de la cual confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dentro del expediente TEEM-PES-001/2016, por la que se decretó la caducidad de la facultad sancionadora en un procedimiento especial sancionador y consideró aplicable la Jurisprudencia **8/2013** a los procedimientos especiales sancionadores instaurados con posterioridad a las reformas en materia electoral de 2014.

De las consideraciones anteriores, se obtiene que, aún y cuando la *Ley electoral local* no establece de forma expresa un plazo determinado para que sean resueltos,⁵ o en su caso, para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en un procedimiento especial sancionador, este Tribunal se encuentra obligado a observar la jurisprudencia ya citada y con base en ella, determinar si se puede ejercer o no la facultad sancionadora y resolver el fondo del asunto.

En ese sentido, como ya se estableció, la *Sala Superior* ha señalado que la regla general para aplicar la caducidad en un procedimiento especial sancionador es de **un año, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso**, supuesto que se actualiza en el procedimiento en que se actúa, pues de las constancias que integran el expediente se evidencia que la denuncia fue presentada por la ciudadana

⁵ Como se advierte del marco normativo inserto.

Cristal Paola Sánchez Bravo, representante suplente del *PRI* ante el *Consejo Distrital*, el día **quince de junio de dos mil dieciocho** y el expediente fue remitido por el órgano electoral sustanciador para su resolución hasta el día **catorce de junio de dos mil diecinueve**, habiendo transcurrido un año completo entre ambas fechas, como a continuación se ilustra:

Periodo	Tiempo transcurrido
Del 15 al 30 de junio de 2018	16 días
Del 01 al 31 de julio de 2018	31 días
Del 01 al 31 de agosto de 2018	31 días
Del 01 al 30 de septiembre de 2018	30 días
Del 01 al 31 de octubre de 2018	31 días
Del 01 al 30 de noviembre de 2018	30 días
Del 01 al 31 de diciembre de 2018	31 días
Del 01 al 31 de enero de 2019	31 días
Del 01 al 28 de febrero de 2019	28 días
Del 01 al 31 de marzo de 2019	31 días
Del 01 al 30 de abril de 2019	30 días
Del 01 al 31 de mayo de 2019	31 días
Del 01 al 14 de junio de 2019	14 días
Total	365 días

De lo anterior, se corrobora que el expediente fue turnado para su resolución por parte de la autoridad administrativa electoral, cuando ya habían transitado 365 días, es decir, transcurrió un año completo desde la presentación de la denuncia hasta el día en que fue remitido a este Tribunal para su resolución.

Ello es así, si se considera que un año calendario completo transcurre del primero de enero al treinta y uno de diciembre, y no del primero de enero al primero de enero del año siguiente, lo cual representaría un año y un día como ha quedado especificado en el recuadro anterior.

Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española, ha establecido diversas acepciones del vocablo “año”, entre las cuales y para sustentar lo anterior, se citan las siguientes:

“Período de doce meses, a contar desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive”; o

“Período de doce meses, a contar desde un día cualquiera”.⁶

En ese sentido, se tiene que el periodo de doce meses que equivalen a un año, cuando se cuentan desde un día distinto al día primero de enero, como en el caso ocurre, a partir del quince de junio de dos mil dieciocho, debe considerarse enteramente transcurrido, de ese día hasta el día catorce de junio de dos mil diecinueve.

De las consideraciones anteriores, se debe concluir que en el caso que se analiza ha operado la **caducidad** de la potestad sancionadora en el presente procedimiento especial sancionador, situación que impide a este órgano jurisdiccional emitir válidamente una resolución que defina sobre la actualización o no de las infracciones denunciadas y en su caso, su sanción respectiva, ya que éste se debió resolver dentro del año siguiente a la presentación de la queja, a fin de respetar las reglas del debido proceso; por lo que, considerando que a la fecha en que fue turnado el expediente ya se encontraba consumado el tiempo para su resolución, acarrea como consecuencia el agotamiento de la potestad sancionadora y se pierde la posibilidad legal de analizar las infracciones denunciadas.

No es obstáculo a la anterior determinación, la excepción⁷ consistente en que el plazo para que opera la caducidad puede ampliarse en los siguientes supuestos:

1. Cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente, en el que exponga las circunstancias de facto o de iure, de las que se advierta **que la dilación en la resolución se debe, entre otras a la conducta procedimental del probable infractor.**
2. Cuando por su desahogo, o complejidad, se requiera la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales, que **razonablemente no puedan realizarse dentro de ese plazo.**

Tales supuestos de excepción no se actualizan en el caso concreto, en razón a que de las constancias que integran el expediente, se advierten las siguientes actuaciones relevantes:

⁶ Consultable en: <https://dle.rae.es/?id=31Ws94Dj31Yyrx8>.

⁷ A que se refiere la Jurisprudencia **11/2013**, de rubro: **“CADUCIDAD, EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”**, aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece.

1. La denuncia fue presentada el día **quince de junio** de dos mil dieciocho, ante el *Consejo Distrital*.
2. El día **diecisiete de junio** del año próximo pasado, la autoridad administrativa electoral, radicó la queja bajo el número de expediente 4/2018-PES-CDXI, además **reservó la admisión o desechamiento de la denuncia** y ordenó la realización de diligencias de investigación preliminar.
3. En fecha **once de septiembre** de dos mil dieciocho, el *Consejo Distrital*, emitió auto con la finalidad de **dar continuidad** al esclarecimiento de los hechos harrados en la denuncia, ordenando requerir a la Coalición, al *PRD* y al Comité municipal del *PAN*, así como a la ciudadana Lorena del Carmen Alfaro García, para que informaran sobre si la cuenta de Facebook ahí descrita les pertenece y si han realizado publicaciones político-electorales en los 11 links que se describen en dicho auto.
4. Mediante auto emitido el **dieciocho de octubre** del año pasado, la autoridad administrativa electoral admitió la denuncia y **ordenó emplazar** a la denunciante y denunciados, fijando las 10:00 horas del día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.
5. A través de **oficio CDXI/093/2018 de fecha veintidós de octubre** de dos mil dieciocho, el Presidente del *Consejo Distrital*, remitió al Encargado de Despacho de la *Unidad Técnica Jurídica* el expediente 4/2018-PES-CDXI, en el cual **determina que la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos programada para el día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, queda formalmente cancelada**.
6. Por auto de fecha **trece de diciembre** de dos mil dieciocho, la *Unidad Técnica Jurídica* asumió la competencia para **continuar con la substanciación** del Procedimiento Especial Sancionador, radicándolo bajo el número de expediente 68/2018-PES-CG, señalando las 13:00 horas del día diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, ordenando emplazar a las partes y citarlas a la referida audiencia.
7. A las 13:00 horas del día **diecinueve de diciembre** del año próximo pasado, tuvo lugar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.
8. Por acuerdo del día **veinte de diciembre** de dos mil dieciocho, la *Unidad Técnica Jurídica* remitió a este Tribunal el expediente 68/2018-PES-CG, el que una vez recibido y seguidos los trámites procesales en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, se declaró **la nulidad de las actuaciones y se ordenó la reposición del procedimiento**, en virtud de las irregularidades detectadas en su integración.
9. En fecha **ocho de marzo del año en curso**, la *Unidad Técnica Jurídica* recibió el expediente 68/2018-PES-CG, dejando insubsistentes aquellas constancias que fueron declaradas nulas y procedió con la tramitación del procedimiento por sus etapas respectivas; ordenando la realización de diversas investigaciones preliminares que corroboren la existencia de los hechos denunciados, **reservando el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de la denuncia**, así como el relativo a la medida cautelar solicitada por la denunciante.
10. Por auto del día **treinta de abril de dos mil diecinueve**, la *Unidad Técnica Jurídica* con el objeto de **continuar con la indagatoria**, solicitó a la Unidad de Oficialía Electoral realizar una certificación del contenido de nueve páginas de internet ahí descritas.
11. En fecha **treinta de mayo del año en curso**, la *Unidad Técnica Jurídica* **admitió** el Procedimiento Especial Sancionador, ordenó emplazar a la denunciante y a los denunciados, citándolos a la audiencia de pruebas y alegatos; además estimó pertinente negar la adopción de la medida cautelar solicitada por la denunciante.
12. A las diez horas del día **diez de junio de dos mil diecinueve**, tuvo verificativo la audiencia desahogo de pruebas y alegatos.

13. En fecha **catorce de junio del año en curso**, la *Unidad Técnica Jurídica* remitió a este órgano jurisdiccional el expediente 68/2018-PES-CG, así como el informe respectivo.

De las anteriores constancias, se evidencía lo siguiente:

- El órgano sustanciador del Procedimiento Especial Sancionador demoró sin justificación alguna la integración del expediente, como se visualiza a continuación:
 - a) De la emisión del auto dictado el día diecinueve de julio de dos mil dieciocho al subsecuente del once de septiembre del mismo año, transcurrieron casi dos meses sin que se haya llevado a cabo ninguna actuación o diligencia por parte del *Consejo Distrital*.
 - b) De la expedición del oficio **CDXI/093/2018** de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho a la emisión del auto de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, transcurrieron 56 días sin que obre diligencia o actuación en el procedimiento.
 - c) Del dictado del auto de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve a la emisión del proveído del treinta de mayo del mismo año, transcurrió un mes sin que exista actuación o diligencia alguna.
 - d) De la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos verificada el día diez de junio de dos mil diecinueve -fecha muy próxima a que se cumpliera el año de caducidad- hasta la remisión del expediente a este Tribunal que aconteció el día catorce de junio de ese año, mediaron cuatro días sin que entre ambas fechas existiera actuación alguna.
- El *Consejo Distrital* integró indebidamente el expediente, pues las diversas diligencias de investigación que realizó, así como el llamamiento a juicio a la parte demandada, mostraron evidentes anormalidades, tal y como se hizo saber en el auto de reposición del procedimiento de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, circunstancias que propiciaron aún más la tardanza en la correcta integración del procedimiento sancionador y que son atribuibles a dicha autoridad administrativa y no a las partes.

- No se desprende ninguna actuación por parte de los probables infractores de la falta denunciada, en el sentido de entorpecer o retardar injustificadamente el procedimiento.

Así, de las consideraciones anteriores, resulta evidente que no se actualiza la excepción que la *Sala Superior* prevé en la Jurisprudencia **11/2013**, en cuanto a que la dilación en la integración del expediente encuentre plena justificación, o que los imputados hubiesen retrasado la integración del expediente; por lo que tiene cabida la aplicación de la Jurisprudencia **8/2013** de rubro **“CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”**; y consecuentemente, en el caso concreto ha operado la **caducidad** de la potestad sancionadora.

No es obstáculo a lo anterior, que las jurisprudencias citadas sean anteriores a las reformas de dos mil catorce, en las que se realizó un cambio en el procedimiento especial sancionador a nivel federal y local, específicamente en las autoridades involucradas en la sustanciación y resolución, correspondiendo actualmente a la autoridad administrativa la sustanciación del procedimiento y al órgano jurisdiccional la resolución.

En tal sentido, si bien las jurisprudencias citadas surgieron cuando el modelo solo contemplaba la intervención de la autoridad administrativa para la sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores, las mismas siguen siendo aplicables ya que la naturaleza de dicho procedimiento sigue siendo sumaria, esto es, su resolución debe acontecer en un breve tiempo, ya que sus efectos se encuentran relacionados con el proceso electoral que se esté desarrollando y puede llegar a influir en el resultado del mismo.

Al respecto, debe tenerse presente que el objeto principal de la figura de la caducidad en procedimientos seguidos en forma de juicio -los cuales podrían llegar a generar una sanción a las partes denunciadas- es evitar que las y los presuntos responsables, se encuentren en estado de incertidumbre respecto a un acto que podría o no generarles una afectación, al mantener indefinida o por un plazo extenso, la posibilidad de ser sancionados, con la consecuente afectación de las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva, tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo determinó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente ST-JRC-2/2017 en la que estableció medularmente lo siguiente:

“Es importante hacer mención que con la reforma de 2014 se realizó un cambio en el procedimiento especial sancionador, específicamente en las autoridades involucradas en la sustanciación y resolución, siendo ahora la autoridad administrativa la que se encarga de la sustanciación del procedimiento y el órgano jurisdiccional quien lo resuelve.

Ahora bien, la jurisprudencia citada surgió cuando el modelo solo contemplaba la intervención de la autoridad administrativa para la sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores.

Sin embargo, **la misma sigue siendo aplicable ya que la naturaleza de dicho procedimiento sigue siendo sumaria, esto es, su resolución debe acontecer en un breve tiempo, ya que sus efectos se encuentran relacionados con el proceso electoral que se esté desarrollando y puede llegar a influir en el resultado del mismo.**

De igual forma, hay que tener presente que el **objeto principal de la figura de la caducidad en procedimientos seguidos en forma de juicio -los cuales podrían llegar a generar una sanción a las partes denunciadas- es evitar que los presuntos responsables se encuentren en estado de incertidumbre respecto a un acto que podría o no generarles una afectación, invadiendo así su esfera jurídica, por lo que se contempla un tiempo razonable para su resolución.**

Asimismo, la caducidad pretende velar por la aplicación de una justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, acelerando la resolución de asuntos que podrían generar un menoscabo en la esfera jurídica de los ciudadanos o de algún ente político.

Es importante hacer notar que, contrario a la pretensión del enjuiciante, **la caducidad es una figura jurídica que opera de manera oficiosa, razón por la cual el tribunal local estaba obligado a declararla en los términos que lo hizo.** Máxime ante la existencia de la jurisprudencia multicitada, misma que resulta obligatoria.”

Igualmente, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente **SRE-PSC-216/2015**, enfatizó sobre la oficiosidad con la que debe analizarse la figura de la caducidad en los procedimientos especiales sancionadores e igualmente consideró aplicable al caso concreto la citada jurisprudencia **8/2013**, como se desprende de la transcripción literal de los siguientes párrafos:

“Por otra parte, conviene precisar que de conformidad con la tesis XXIV/2013, cuyo rubro es: **CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO**, esta autoridad jurisdiccional electoral federal tiene la obligación de analizar de oficio la configuración de la caducidad, figura mediante la cual se extingue la facultad sancionadora de las autoridades electorales, aún en aquellos casos en los que las partes no lo soliciten como motivo de inconformidad, pues ello constituye un elemento que otorga certeza y seguridad a los gobernados.

Al respecto, la Sala Superior, ha establecido que entre los principios del Estado democrático evidentemente se encuentran los de legalidad, debido proceso, así como los de certeza y seguridad jurídica, que son precisamente los rectores de la función punitiva y conforme a estos se justifica el reconocimiento de que las infracciones que cometen las personas jurídicas, están sujetas a la extinción de la potestad para sancionarlas.

En ese tenor, la Sala Superior emitió la tesis de jurisprudencia 8/2013 de rubro: **CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR**, en donde estableció que en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza sumaria y las características especiales de dicho procedimiento.

Dicha figura prevé que mantener indefinida o por un plazo extenso la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, físicas o morales, conculca su esfera de derechos porque genera falta de certeza, al colocarlo en una estatus dudoso para el ejercicio de sus derechos, con la consecuente afectación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva.

Esto es así, porque el ejercicio de la facultad punitiva no puede ser indefinida ni perenne, pues debe estar acotado temporalmente y esa restricción obedece a las reglas del debido proceso, base de la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la jurisdicción del Estado, los cuales, encuentran su sustento en las garantías constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En tales condiciones al haber operado la caducidad de la potestad sancionadora, este Tribunal se encuentra impedido para emitir válidamente una resolución que defina la existencia o no de las infracciones denunciadas.

3. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se declara la **caducidad** de la potestad sancionadora dentro del presente procedimiento especial sancionador, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia, lo que imposibilita el dictado de una sentencia de fondo que dirima la controversia planteada, de acuerdo con el análisis desarrollado en el apartado **2.3.** de la presente resolución.

Notifíquese la presente determinación de manera **personal** a las partes en sus respectivos domicilios procesales que obran en autos; **mediante oficio al Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato** en su domicilio oficial; y finalmente, por los **estrados** de este Tribunal a cualquier otra persona que pudiera tener el carácter de tercero interesado, anexando en todos los casos, copia certificada de la presente resolución.

Asimismo, publíquese la presente determinación en la página electrónica www.teegto.org.mx, en términos de lo que establece el artículo 109 del Reglamento Interior del Tribunal y **comuníquese mediante correo electrónico a las partes que así lo hayan solicitado.**

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por unanimidad de votos de quienes lo integran, Magistrados Electorales **Héctor René García Ruiz**, **Gerardo Rafael Arzola Silva** y Magistrada Electoral **María Dolores López Loza**, quienes firman conjuntamente, siendo Magistrada instructora y ponente la última nombrada, quienes actúan en forma legal ante el Secretario General, Alejandro Javier Martínez Mejía.- Doy Fe.

Héctor René García Ruiz
Magistrado Presidente

Gerardo Rafael Arzola Silva
Magistrado Electoral

María Dolores López Loza
Magistrada Electoral

Alejandro Javier Martínez Mejía
Secretario General